

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/CTE/W/62

16 de septiembre de 1997

(97-3702)

Comité de Comercio y Medio Ambiente

Original: inglés

EL ACUERDO DE 1994 RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 1982: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN APLICABLE A LOS MINERALES DE LOS FONDOS MARINOS

Comunicación de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar
de las Naciones Unidas, Oficina de Asuntos Jurídicos

I. INTRODUCCIÓN

1. Uno de los 10 puntos que figuran en el mandato del Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) consiste en examinar la relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las medidas comerciales adoptadas con fines ambientales, con inclusión de las adoptadas en aplicación de acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA) (Punto 1). Un punto relacionado con el anterior es el que se refiere a los mecanismos de solución de diferencias del sistema multilateral de comercio y los previstos en los AMUMA (Punto 5). El CCMA se ha ocupado de las disposiciones relacionadas con el comercio del Acuerdo de 1994 relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (en adelante denominado el "Acuerdo de Aplicación"). La División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, en su calidad de Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1992 (en adelante denominada "la Convención"), expresa su reconocimiento al Presidente del CCMA por la invitación a que preparase un documento de antecedentes sobre las disposiciones del Acuerdo de Aplicación relacionadas con el comercio que figuran en la sección 6 de su anexo.

2. En el presente documento se ofrece información básica acerca de las disposiciones de la sección 6 del anexo del Acuerdo de Aplicación. La sección 6 del anexo al Acuerdo de 1994 relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención contiene una referencia explícita a la aplicabilidad de las disposiciones del GATT, sus correspondientes códigos y los acuerdos que le sucedan o reemplacen en lo que respecta a las subvenciones en la zona minera de los fondos marinos. La sección 6 hace referencia también a la posibilidad de recurrir a los procedimientos de solución de diferencias del GATT.

3. Se presenta un análisis de los principios que han constituido la base de las disposiciones, y del procedimiento que permitió llegar a las mismas. La finalidad de ello es facilitar el análisis de dos cuestiones principales que está examinando el CCMA: i) la compatibilidad de las disposiciones de los AMUMA relacionadas con el comercio y las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC); ii) la convergencia de los procedimientos de solución de diferencias en asuntos relacionados con el comercio en el marco de los AMUMA y de los procedimientos de la OMC.

II. EL RÉGIMEN DE LA ZONA INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS Y SUS RECURSOS

A. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

4. La Convención establece un régimen amplio para los océanos y mares del mundo; crea el marco jurídico y normas detalladas que rigen los usos de todos los océanos y el acceso a sus recursos. En la Convención (párrafo 1 del artículo 1) se entiende por "Zona" los fondos marinos y oceánicos y sus subsuelos fuera de los límites de la jurisdicción nacional. En la Resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 17 de diciembre de 1970 se declaró que la Zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad, cuya exploración y explotación será realizada en beneficio de la humanidad en su conjunto. Este concepto totalmente nuevo en las relaciones internacionales y en el derecho internacional recibió un significado práctico en la Convención. En la parte XI de ésta y en los anexos correspondientes (anexos III y IV) se establece el régimen aplicable a la Zona internacional de los fondos marinos y sus recursos.

5. La razón fundamental de que las posibilidades de conflictos sean mínimas entre el programa comercial y el programa ambiental previstos en la Convención, consiste en que ésta constituye uno de los principales acuerdos multilaterales que tiene como tema central el principio del desarrollo sostenible. Este equilibrio entre los objetivos de comercio y desarrollo, por una parte, y los objetivos ambientales, por la otra, con respecto a los recursos y el medio ambiente marino y costero, logrado en la Convención, es tan racional y eficaz que la CNUMAD lo tomó como base para elaborar el capítulo 17 del Programa 21.¹ En este contexto, cabe decir que el principio que figura en la Decisión Ministerial de Marrakech sobre comercio y medio ambiente ya está implícito en la Convención: no debe existir, ni es necesario que exista ninguna contradicción en materia de políticas entre el sostenimiento y la defensa de un sistema multilateral de comercio no discriminatorio y equitativo, por una parte, y la actuación en favor de la protección del medio ambiente, por la otra.

6. Se considera que la Convención es un AMUMA, si bien se reconoce que no existe una definición precisa de qué es un AMUMA. No obstante, cabe tener presente una importante cuestión: la Convención establece el marco para el desarrollo oceánico y costero y para el comercio de bienes y servicios desde el sector marino y costero. En particular, la parte XI de la Convención y los anexos correspondientes establecen el régimen para el desarrollo y la gestión de los recursos de la Zona internacional de los fondos marinos. En el artículo 150 (parte XI) se establece la política general en relación con la exploración y explotación de estos recursos: esas actividades se realizarán "de manera que fomenten el desarrollo saludable de la economía mundial y el crecimiento equilibrado del **comercio internacional** ..." (el subrayado es nuestro). En este sentido, la Convención puede también ser considerada como un acuerdo multilateral de comercio. Ésta es otra importante razón que explica la armonía existente entre el programa de comercio y el programa de medio ambiente previstos en la Convención.

B. Política de producción aplicable a los minerales de los fondos marinos de conformidad con la Convención

7. Según la Convención, se entiende que los recursos de la Zona internacional de los fondos marinos abarcan todos los recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos *in situ* en la Zona, situados en los fondos marinos o en su subsuelo (apartado a) del artículo 133).

¹El capítulo 17 se refiere a la "protección de los océanos, y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos". Véase Naciones Unidas, Programa 21: Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, Nueva York, 1993, párrafo 17.1.

8. En la época en que los negociadores que participaron en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar formulaban las disposiciones de la parte XI de la Convención, es decir, durante la última parte del decenio de 1970 y los primeros años del de 1980, el crecimiento de la demanda de metales era notable; al mismo tiempo, las actividades de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la minería y de elaboración de nódulos polimetálicos anunciaban resultados muy alentadores.² En estas circunstancias, quienes explotaban estos metales en tierra comenzaron a preocuparse por la posible pérdida de su participación en el mercado en favor de esta nueva fuente de metales, aparentemente atractiva. Por otra parte, quienes se proponían explotar los fondos marinos estaban preocupados por el hecho de que su situación de recién llegados podía impedirles participar en el mercado.

9. Con este telón de fondo, la política de producción relativa a los nódulos polimetálicos de los fondos marinos, tal como se expone en el artículo 151 (parte XI de la Convención) y en los artículos 6 y 7 del anexo II de la Convención, tiene dos características básicas:

- Con miras a lograr un equilibrio de la oferta procedente de fuentes terrestres y la proveniente de nuevas fuentes de los fondos marinos, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos limitaría la producción de metales procedentes de nódulos polimetálicos. La fórmula para la limitación de la producción estaba vinculada al aumento de la demanda de níquel: la producción total procedente de los fondos marinos no excedería en ningún año el 60 por ciento del aumento de la demanda de níquel. Las autorizaciones de producción serían expedidas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos individualmente a los explotantes mineros de los fondos marinos dentro del límite general establecido en la fórmula.
- En caso de que fuera necesario realizar una selección entre los solicitantes de autorizaciones de producción, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos realizaría esta selección mediante la aplicación de ciertos criterios.

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ("la Autoridad") es la organización por conducto de la cual sus miembros organizarán y controlarán las actividades de exploración y explotación de los recursos de la Zona de los fondos marinos internacionales, especialmente con miras a la administración de esos recursos (Convención, párrafo 1 del artículo 157).

C. Formulación de las disposiciones de la sección 6 (Política de producción) del anexo del Acuerdo de Aplicación

10. La Convención fue adoptada en abril de 1982 y entró en vigor en noviembre de 1993, con la 60ª ratificación. En septiembre de 1997, 120 Estados han ratificado la Convención o se han adherido a ella. A comienzos del decenio de 1980, se reconoció que existían problemas con relación a algunos aspectos de las disposiciones de la Convención relativas a la explotación minera de los fondos marinos, lo que había impedido que algunos Estados ratificaran dicha Convención o se adhirieran a ella.

11. A comienzos del decenio de 1990, se estimó que en los años que habían transcurrido desde la adopción de la Convención, se habían producido algunos cambios importantes en los planos político y económico, que habían tenido notables consecuencias sobre el régimen de explotación minera de

²Las investigaciones realizadas en los últimos decenios sugieren que se podrían encontrar en la Zona internacional de los fondos marinos varios tipos de minerales metalíferos. Estos minerales son los siguientes: nódulos polimetálicos, costras de manganeso, sulfuros polimetálicos y arcilla roja metalífera. Los nódulos polimetálicos contienen aproximadamente 55 elementos metálicos y no metálicos, entre los que revisten interés económico el cobre, el níquel, el cobalto y el manganeso.

los fondos marinos contenido en la Convención. Las perspectivas de explotación de los minerales de los fondos marinos se habían trasladado al siglo próximo, que no era lo previsto durante las negociaciones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El clima económico general se había modificado, como consecuencia de una diferente postura con respecto al papel del sector público y del sector privado. Se podía distinguir un cambio de tendencia hacia una economía más orientada al mercado. Por otra parte, estaba apareciendo un nuevo espíritu de cooperación internacional para resolver los problemas pendientes en los planos regional y mundial. Estos factores contribuyeron a crear una atmósfera favorable para abordar los problemas relativos al régimen de explotación minera de los fondos marinos. De ahí que se iniciara una serie de consultas, con el patrocinio del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre las cuestiones pendientes relativas a las disposiciones de la Convención aplicables a la explotación minera de los fondos marinos. Estas consultas oficiosas se celebraron entre los años 1990 y 1994.

12. Los participantes en estas consultas convinieron en general en que la fórmula empleada en la Convención ya no resultaba práctica. También hubo acuerdo general en el sentido de que no era necesario ni prudente en esta etapa establecer un nuevo conjunto de normas detalladas para la aplicación de la política de producción, habida cuenta de la demora prevista en la explotación minera comercial de los fondos marinos y la falta de datos suficientes acerca de sus consecuencias. Hubo acuerdo general en el sentido de que, en esta etapa, era mejor establecer ciertos principios sobre cuya base se podían establecer normas y reglamentos detallados cuando la producción comercial fuera inminente. Por lo tanto, el Acuerdo de Aplicación establece tales principios de política de producción relativa a los nódulos polimetálicos de los fondos marinos en la sección 6 de su anexo.

13. El enfoque fundamental de la política de producción contenido en la sección 6 del anexo del Acuerdo de Aplicación es el recurso a los principios del libre mercado en sustitución de los principios de economía dirigida que estaban implícitos en el artículo 151 de la Convención. La competencia leal es el mecanismo fundamental para la aplicación de los principios del libre mercado. Ya desde el comienzo, en las consultas celebradas por el Secretario General, una vez que se convino en que se descartarían los principios de la economía dirigida que regían la política de producción en la parte XI de la Convención, se hizo hincapié en asegurar la libre competencia entre las explotaciones mineras en tierra y las realizadas en los fondos marinos. Se desprendía lógicamente de esto que los participantes en las consultas del Secretario General se remitirían al sistema multilateral vigente para garantizar la libre competencia: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Esta dependencia del GATT se vio acentuada por la coincidencia temporal: las prolongadas negociaciones de la Ronda Uruguay estaban llegando a una culminación satisfactoria y que las consultas del Secretario General sobre las cuestiones pendientes relativas al régimen minero de los fondos marinos estaban avanzando convenientemente.

14. Un principio fundamental que sirvió de base a la formulación de la Convención era el de que "los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto" (preámbulo de la Convención). Una vez que los participantes en las negociaciones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptaron un enfoque integrado de los asuntos oceánicos, reconocieron que ya existía una gran cantidad de leyes y normas en las organizaciones internacionales, relativas a sectores particulares o a determinadas disciplinas o a aspectos específicos de los asuntos oceánicos. Esto llevó a la estrategia de utilizar la competencia respectiva de las organizaciones internacionales existentes. En este sentido, numerosas disposiciones de la Convención hacen referencia a las organizaciones internacionales "competentes", "apropiadas" o "pertinentes", y en algunos casos esas organizaciones se identifican expresamente.

15. Un examen de la política de producción que se establece en la sección 6 del anexo al Acuerdo de Aplicación demuestra que es realmente una combinación de medidas relativas al comercio leal. Al establecer estas medidas comerciales, siguiendo la estrategia adoptada en la Convención, los

participantes en las consultas del Secretario General se remitieron a la autoridad de la organización internacional competente que, en este caso, es el GATT. Ésta es la razón esencial por la que las posibilidades de conflictos entre las medidas comerciales contenidas en el Acuerdo de Aplicación y las medidas de la OMC, si existieran, serían mínimas.

16. Las disposiciones que figuran en la sección 6 del anexo del Acuerdo de Aplicación evolucionaron a lo largo de varias rondas de consultas. La primera versión del texto fue examinada y acordada durante la ronda celebrada en diciembre de 1991. Esta versión incluye los principios básicos siguientes: a) el principio contrario a las subvenciones (véase el párrafo 1 c) de la sección 6); b) el principio de no discriminación (véase el párrafo 1 d) de la sección 6); c) el principio relativo al problema de las prácticas económicas desleales (véase el párrafo 7 de la sección 6); y d) los procedimientos de solución de diferencias establecidos en la Convención (véase el párrafo 1 f) ii) de la sección 6). (El texto de la sección 6 del anexo al Acuerdo de Aplicación se reproduce en el anexo I del presente documento.) La propia Convención contiene disposiciones relativas al problema de las prácticas económicas desleales (párrafo 8 del artículo 151). Finalmente, la disposición acordada en el Acuerdo de Aplicación fue idéntica a la de la Convención. Por lo tanto, el párrafo 8 del artículo 151 de la Convención se mantuvo en el Acuerdo de Aplicación. El párrafo 8 del artículo 151 menciona específicamente "los derechos y obligaciones en materia de prácticas económicas desleales previstos en los acuerdos comerciales multilaterales pertinentes". Los antecedentes legislativos de esta disposición señalan el hecho de que el GATT fue considerado como el principal "acuerdo comercial multilateral pertinente".

17. Desde las primeras rondas de consultas, los tres temas principales en los que se insistió reiteradamente fueron la necesidad de que no hubiera subvenciones, la no discriminación entre las explotaciones mineras realizadas en tierra o en los fondos marinos, y las medidas contra las prácticas económicas desleales. Durante la ronda celebrada en junio de 1992, se produjo un acontecimiento importante que inició la vinculación con el GATT. En el contexto de las necesidades mencionadas precedentemente, los participantes en las consultas del Secretario General señalaron que las disposiciones correspondientes del GATT eran directamente pertinentes y aplicables. También se hizo hincapié en los procedimientos de solución de diferencias del GATT, y se instó a que, como la Convención ya incluía la posibilidad de recurrir a esos procedimientos, era necesario remitirse a las disposiciones de la Convención a este respecto. No era una coincidencia que la referencia al GATT en las cuestiones relacionadas con el comercio y el expreso reconocimiento de la autoridad del GATT en estas cuestiones se produjera en un momento en que la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales estaba llegando a una conclusión satisfactoria y existía un acuerdo general entre los gobiernos que participaban en las negociaciones respecto de las disposiciones relativas a la no concesión de subvenciones, no discriminación y medidas contra las prácticas económicas desleales.

18. De este modo, la versión de las disposiciones sobre "política de producción" disponible para ser examinado en las consultas de enero de 1993 contenía una referencia expresa a la aplicabilidad de las disposiciones sobre subvenciones del GATT relativas a las explotaciones mineras de los fondos marinos. También se hacía una referencia expresa al recurso al procedimiento de solución de diferencias de los acuerdos comerciales multilaterales, fundamentalmente el GATT.

19. En la Comisión Especial 1 de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar existía un largo historial de examen de las medidas aplicables contra las subvenciones, la discriminación, las prácticas económicas desleales y las restricciones comerciales en general. La Comisión Preparatoria fue establecida por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el mandato de adoptar medidas para asegurar la efectiva entrada en funcionamiento, sin demoras indebidas, de dos instituciones establecidas por la Convención: la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Comisión Especial 1 fue establecida por la Comisión Preparatoria con la misión de estudiar los problemas con los que podrían tropezar los Estados en desarrollo

productores terrestres, que probablemente se verían gravemente afectados por la producción en los fondos marinos. En las deliberaciones de la Comisión Especial 1 también se mencionaron a menudo las medidas del GATT.

20. Se consiguió una mayor consolidación y precisión de las disposiciones relativas a la no concesión de subvenciones, la no discriminación y las medidas contra las prácticas económicas desleales durante la ronda de consultas celebrada por el Secretario General en enero de 1993 y en las rondas posteriores. Dicha consolidación y precisión se refería básicamente a tres cuestiones: a) se reconoció la aplicabilidad general de las disposiciones del GATT con respecto a la exploración y explotación de los recursos de la Zona internacional de los fondos marinos; esto ampliaba la autoridad del GATT, en comparación con los textos anteriores, que mencionaban al GATT sólo en relación con ciertas cuestiones concretas, por ejemplo, la no concesión de subvenciones, las prácticas económicas desleales, etc.; b) se reconoció la complejidad de la cuestión de las subvenciones, tal como se abordaban en las disposiciones del GATT; de este modo, se evitó la necesidad de añadir una definición de "subvención", y al mismo tiempo se admitió la posibilidad de autorizar subvenciones en ciertas circunstancias; esto se consiguió simplemente mediante la vinculación de las disposiciones de la sección 6 con las disposiciones pertinentes del GATT; y c) también se reconoció, cuando resultara aplicable, la autoridad de los acuerdos de libre comercio y de los acuerdos de unión aduanera.

21. Las medidas relativas a la no concesión de subvenciones y a la no discriminación fueron reforzadas aún más al preverse la posible adopción de medidas por los Estados partes y las obligaciones contractuales de los explotadores de la minería de los fondos marinos con respecto al principio de no concesión de subvenciones. Un Estado parte puede en cualquier momento señalar al Consejo (órgano ejecutivo de la Autoridad) las actividades que a su juicio sean incompatibles con los requisitos de no concesión de subvenciones y no discriminación previstos en la sección 6. Cuando en el marco del GATT se adoptara la determinación de que un Estado parte ha concedido subvenciones prohibidas o que han ocasionado efectos desfavorables para los intereses de otro Estado parte y el Estado parte o los Estados partes no hubieran tomado las medidas apropiadas, el Estado parte afectado puede solicitar al Consejo que adopte las medidas apropiadas. La aceptación de subvenciones por parte de un contratista, excepto las que puedan ser autorizadas en el marco del GATT, constituirá una violación de las condiciones fundamentales del contrato que constituyen un plan de trabajo para la realización de actividades de exploración o explotación en la Zona internacional de los fondos marinos.

22. Los elementos que se acaban de mencionar también obtuvieron un acuerdo general, que se reflejó en la versión definitiva del texto de las disposiciones sobre "Política de producción", incluidas en la sección 6 del anexo del Acuerdo de Aplicación.

D. Procedimientos de solución de diferencias con arreglo a la Convención

23. También se obtuvo una mayor precisión en las disposiciones relativas a la solución de diferencias. Se reconoció que numerosos Estados que no se habían adherido al GATT podrían no tener acceso al procedimiento de solución de diferencias del GATT. Era necesario prever la situación de esos Estados, y se obtuvo un acuerdo general, en el sentido de que dichos Estados podrían recurrir al procedimiento de solución de diferencias establecido en la propia Convención.³

³El número de Estados partes en la Convención y también el número de Miembros de la OMC han aumentado a lo largo del tiempo. En abril de 1997, eran Estados partes en la Convención, pero no Miembros de la OMC los 31 países siguientes (los 13 Estados señalados con un asterisco son observadores en la OMC): Arabia Saudita*, Argelia*, Bahamas, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, China*, Comoras, Croacia*, Antigua República Yugoslava de Macedonia*, Federación de Rusia*, Georgia*, Iraq, Islas Cook, Islas Marshall, Jordania*, Líbano, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Nauru, Omán*, Palau, Panamá*, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles*, Somalia, Sudán*, Viet Nam*, Yemen, Yugoslavia y Zaire.

24. La Convención presenta la singularidad de que el mecanismo para la solución de diferencias está incorporado al documento, de modo que resulta obligatorio para las partes en la Convención el recurrir a este procedimiento de solución en el caso de diferencias con otra parte. Durante la redacción de la Convención, algunos países se opusieron en principio a la solución de diferencias vinculante, que sería decidida por jueces o árbitros terceros, e insistieron en que el mejor modo de resolver esas cuestiones eran las negociaciones directas entre los Estados, sin exigírseles que hicieran intervenir a terceros. Otros, que pusieron de manifiesto un historial de negociaciones fracasadas y de diferencias prolongadas que a menudo habían dado lugar a la utilización de la fuerza, sostuvieron que la única posibilidad segura de obtener una solución pacífica residía en la voluntad de los Estados de obligarse con antelación a aceptar las decisiones de órganos judiciales. De las negociaciones surgió una combinación de los dos enfoques, que muchos han considerado como un hito del derecho internacional.

25. Si las conversaciones directas entre las partes no dan resultado, la Convención les da la posibilidad de escoger entre cuatro procedimientos, algunos de los cuales son nuevos y otros antiguos: la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, establecido en la propia Convención; la decisión a cargo de la Corte Internacional de Justicia; la utilización de procedimientos internacionales de arbitraje vinculante, o la presentación ante tribunales de arbitraje especiales, calificados para abordar determinados tipos de diferencias. Todos estos procedimientos suponen soluciones vinculantes a cargo de terceros, con arreglo a los cuales un actor distinto de las partes directamente involucradas adopta una decisión que las partes se comprometen por adelantado a respetar.

26. Las diferencias relativas a las actividades en los fondos marinos serán arbitradas por la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, integrada por 11 miembros, establecida en el ámbito del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Cámara tendrá competencia obligatoria respecto de todos esos conflictos, en los que participen Estados, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos o empresas o particulares que sean contratistas en actividades de explotación minera de los fondos marinos.

III. OBSERVACIONES FINALES

27. La información y el análisis precedentes, que en cierto sentido constituyen los antecedentes legislativos de las disposiciones del Acuerdo de Aplicación relacionadas con el comercio, llevan a la conclusión de que se trata de un AMUMA bastante excepcional desde la perspectiva del CCMA. Su peculiaridad reside en que no sólo atribuye competencia a la OMC para resolver las diferencias que involucren medidas relacionadas con el comercio, en particular las subvenciones a la producción y las restricciones comerciales, sino que además reconoce expresamente la autoridad de la OMC en la aplicabilidad de las medidas relacionadas con el comercio en lo que respecta a la explotación minera de los fondos marinos.⁴

28. La amplitud de las disposiciones de solución de diferencias tiene también la peculiaridad de que éstas se aplican a quienes son Miembros de la OMC y también a quienes no lo son. Ahora bien, un punto interesante es que, como la autoridad de la OMC en la aplicabilidad de las medidas relacionadas con el comercio se ha incorporado estrechamente a las disposiciones relacionadas con el comercio,

⁴En este contexto, cabe mencionar una cuestión importante que quizá sea ajena al ámbito del CCMA, pero que podría revestir interés para la OMC: en materia de normas de origen, si bien el concepto general de origen ajeno o exterior a una jurisdicción nacional aceptada se desprende claramente de la frecuente referencia al alta mar, la Antártida y el espacio ultraterrestre, quizá sea necesario hacer adaptaciones en las definiciones de la Zona internacional de los fondos marinos. Esto también podría tener repercusiones en materia de "doble imposición", en relación con los pagos que realicen los futuros explotadores mineros de los fondos marinos a sus gobiernos nacionales y a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

el tribunal o árbitro escogido por quienes no sean partes en la OMC, de conformidad con los procedimientos de solución de diferencias de la Convención, aplicarán muy probablemente las normas de la OMC como derecho sustantivo.⁵

29. Como se ha señalado, "hasta ahora no se ha presentado en el GATT ni en la OMC ningún litigio sobre medidas comerciales utilizadas en aplicación de un AMUMA"⁶; se puede añadir que tampoco ha habido ninguna diferencia relacionada con el comercio, en el marco de la Convención, con respecto a la explotación minera de los fondos marinos. El hecho de que la etapa actual de desarrollo de la minería de los fondos marinos indica que es improbable que la explotación comercial se produzca antes del año 2010, reduce aún más las posibilidades de diferencias relacionadas con el comercio en el futuro próximo. También cabe sostener que la existencia de un organismo encargado de administrar los recursos, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, puede en sí misma constituir un disuasivo de posibles conflictos.

30. Cabe añadir que, en relación con la disposición del párrafo 6 de la sección 6 del anexo del Acuerdo de Aplicación, la Autoridad está actualmente culminando la elaboración de normas, reglamentos y procedimientos para la prospección y exploración de nódulos polimetálicos.⁷ Al formular dichas normas, reglamentos y procedimientos, la Autoridad tiene que asegurar la aplicación de las disposiciones de la sección 6, lo que remite a la autoridad de la OMC en la aplicabilidad de las medidas relacionadas con el comercio. Existen disposiciones ambientales en el proyecto de normas, reglamentos y procedimientos sobre la prospección y exploración, pero los tipos de actividades previstas durante la exploración consisten principalmente en tareas de reconocimiento no invasivas y no se prevé que constituyan una grave preocupación en lo que respecta a sus consecuencias ambientales.⁸ Por lo tanto, es también sumamente improbable que las consecuencias relacionadas con el comercio de estas disposiciones ambientales mínimas constituyan una grave preocupación.

⁵Véase Organización Mundial del Comercio, Comité de Comercio y Medio Ambiente, "Comunicación de Chile" (WT/CTE/W/2 de 16 de febrero de 1995).

⁶Organización Mundial del Comercio, Comité de Comercio y Medio Ambiente, "Informe (1996) del Comité de Comercio y Medio Ambiente" (WT/CTE/1 de 12 de noviembre de 1996), párrafo 174.

⁷Un órgano subsidiario de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, integrada por 22 expertos y denominada Comisión Jurídica y Técnica, está examinando esas normas, reglamentos y procedimientos. Se prevé que el Consejo de la Autoridad adopte esas normas, basándose en las recomendaciones de dicha Comisión. La última versión de tales normas, reglamentos y procedimientos figura en un documento de la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que se refiere al proyecto de reglamento sobre prospección y exploración de nódulos polimetálicos en la Zona; se trata de un texto provisional elaborado por la Comisión Técnica y Jurídica (ISBA/3/LTC/WP.1/Rev.1 de 28 de mayo de 1997).

⁸Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Informe del Secretario General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de conformidad con el párrafo 4 del artículo 166 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ISBA/3/A/4 de 31 de julio de 1997), párrafo 54.

ANEXO I

Sección 6 del anexo del Acuerdo de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982

SECCIÓN 6. POLÍTICA DE PRODUCCIÓN

1. La política de producción de la Autoridad se basará en los principios siguientes:
 - a) El aprovechamiento de los recursos de la Zona se hará conforme a principios comerciales sólidos;
 - b) Las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, sus correspondientes códigos y los acuerdos que le sucedan o reemplacen, se aplicarán con respecto a las actividades en la Zona;
 - c) En particular, no se otorgarán subsidios a las actividades realizadas en la Zona salvo en la medida en que lo permitan los acuerdos indicados en el apartado b). El otorgamiento de subsidios para los efectos de estos principios se definirá según los acuerdos indicados en el apartado b);
 - d) No se discriminará entre los minerales extraídos en la Zona y de otras fuentes. No habrá acceso preferente a los mercados para esos minerales, ni para las importaciones de productos básicos elaborados a partir de ellos, en particular:
 - i) Mediante la aplicación de barreras arancelarias o no arancelarias; y
 - ii) El que den los Estados partes a dichos minerales o a los productos básicos elaborados a partir de esos minerales por sus empresas estatales, o por personas naturales o jurídicas que tengan su nacionalidad o estén controladas por ellos o por sus nacionales;
 - e) El plan de trabajo para explotación aprobado por la Autoridad respecto de cada área de explotación minera indicará el calendario de producción previsto, en el que se incluirán las cantidades máximas estimadas de minerales que se producirían por año de conformidad con el plan de trabajo;
 - f) Las reglas que siguen se aplicarán a la solución de las controversias relativas a las disposiciones de los acuerdos mencionados en el apartado b):
 - i) Si los Estados partes afectados son partes en dichos acuerdos, podrán recurrir a los procedimientos de solución de controversias previstos en esos acuerdos;
 - ii) Si uno o más de los Estados partes afectados no son partes en dichos acuerdos, podrán recurrir a los procedimientos de solución de controversias establecidos en la Convención;
 - g) En los casos en que se determine, a tenor de los acuerdos mencionados en el apartado b), que un Estado parte ha otorgado subsidios que están prohibidos o que han redundado en perjuicio de los intereses de otro Estado parte, y que el Estado parte

o los Estados partes en cuestión no han adoptado las medidas adecuadas, un Estado parte podrá pedir al Consejo que adopte tales medidas.

2. Los principios contenidos en el párrafo 1 no afectarán a los derechos y obligaciones previstos en las disposiciones de los acuerdos señalados en el apartado b) del párrafo 1, ni a los acuerdos de libre comercio y de unión aduanera correspondientes, en las relaciones entre Estados partes que sean partes en esos acuerdos.

3. La aceptación por un contratista de subsidios distintos de los permitidos en virtud de los acuerdos señalados en el apartado b) del párrafo 1 constituirá una violación de los términos fundamentales del contrato por el que se establezca un plan de trabajo para la realización de actividades en la Zona.

4. Todo Estado parte que tenga razones para creer que ha habido una infracción de los requisitos de los apartados b) a d) del párrafo 1 o del párrafo 3 podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias de conformidad con lo dispuesto en los apartados f) o g) del párrafo 1.

5. Un Estado parte podrá en cualquier momento señalar a la atención del Consejo aquellas actividades que en su opinión sean incompatibles con los requisitos establecidos en los apartados b) a d) del párrafo 1.

6. La Autoridad elaborará normas, reglamentos y procedimientos que garanticen el cumplimiento de las disposiciones de esta sección, entre ellos, normas, reglamentos y procedimientos pertinentes que rijan la aprobación de los planes de trabajo.

7. Las disposiciones de los párrafos 1 a 7 y 9 del artículo 151, del apartado q) del párrafo 2 del artículo 162, del apartado n) del párrafo 2 del artículo 165, y del párrafo 5 del artículo 6 y del artículo 7 del anexo III de la Convención, no serán aplicables.